

Tres ejidos, tres realidades

Lucy Conger

En México hay más de 28 mil ejidos que cubren casi 100 millones de hectáreas, o la mitad del territorio nacional, y abarcan una diversa y rica variedad de climas, topografías y cultivos. Las tierras de los ejidos y comunidades indígenas son el sustento de 3 millones de ejidatarios que, con sus familias, suman unos 15 millones de mexicanos. Es decir, los ejidos en conjunto son casi otro Distrito Federal.

En las tierras que les fueron dotadas, los ejidatarios y comuneros tienen que lidiar con condiciones bastante adversas para desempeñar sus labores agrícolas. Solamente 17 por ciento del territorio nacional, entre 20 y 30 millones de hectáreas, es cultivable. La mayoría de las tierras cultivadas son de temporal, lo cual por definición demanda de la bondad de la naturaleza para poder producir. De la tierra cultivable hay riego en la quinta parte, o sea, algo más de 4 millones de hectáreas. Así, por cada mexicano hay aproximadamente 3 mil metros cuadrados de tierra cultivable (menos de un tercio de hectárea) de los que escasos 600 metros cuadrados cuentan con riego.

El fenómeno del minifundismo es general en la agricultura: más de 57 por ciento de las parcelas son de menos de cinco hectáreas, y 33 por ciento son de entre cinco y 20 hectáreas. Poseedores del 48 por ciento del territorio nacional, los ejidatarios y comuneros cultivan 21 por ciento de su propiedad y generan 48 por ciento de la producción agrícola nacional, mientras las llamadas pequeñas propiedades, que ocupan 38 por ciento del territorio, cultivan 19 por ciento de su superficie y generan 51 por ciento de la producción nacional agrícola.⁽¹⁾

La Nueva Ley Agraria, iniciativa del presidente Carlos Salinas de Gortari, que reformó el artículo 27 constitucional, se aplica por igual a todos y cada uno de los ejidos y comunidades indígenas del país, por más distintas que sean sus situaciones. Los principios básicos de la ley, por ende, los cambios más profundos que promoverá, son los que permiten a los ejidatarios transferir su derecho de usufructo a otros y de votar que se venda el ejido, además de permitir la asociación de inversionistas y sociedades mercantiles con ejidos para fomentar la capitalización del campo.

A poco más de medio año de haberse promulgado la ley, *Este país* visitó tres ejidos para conocer la reacción de los ejidatarios ante la reforma y enterarse de cómo se están dando los cambios en el campo. Obviamente, no se puede pretender con pocos ejemplos sacar conclusiones generales y aplicables a todos los casos. Sin embargo, se visitaron tres ejemplos importantes y distintos de la enorme variedad de tipos de ejidos, y que pueden ofrecer lecciones para el proceso de cambio que va a vivir el campo mexicano en los años venideros: Vaquerías, el ejido consentido del presidente Carlos Salinas, donde se realiza el proyecto y esquema modelo de la reforma salinista en el campo, la asociación entre inversionistas y ejidatarios; Plan Chontalpa, un ejido grande con fuertes inversiones del gobierno, donde se propone un esquema alternativo al cultivo comercial que está llevando a los ejidatarios a vender sus tierras; y Nueva Italia, un ejido dotadísimo y familiarizado con la agro-exportación que vive en carne propia los atascos del crédito, la comercialización y los pleitos internos en medio de un fuerte potencial de riqueza agrícola.

Vaquerías, Nuevo León

Tras dos horas y media de viaje desde Monterrey, por una carretera que atraviesa tierras desoladas, azotadas por fuertes y constantes vientos, se encuentra el pueblo solitario de Vaquerías de menos de cien casas. Sorpresivamente, en los últimos dos años este lugar aislado e inhóspito se ha convertido en el centro de atención de los especialistas agrícolas del gobierno, y de los inversionistas que indagan las posibilidades de hacer producir su capital en el campo.

En Vaquerías, en 4 mil 500 hectáreas de tres ejidos, dos colonias y una pequeña propiedad, se realiza el proyecto piloto y modelo salinista que se aspira extender en el campo con base en las nuevas figuras para inversión que contempla la reforma del artículo 27.

Hace dos años se juntaron en Vaquerías ejidatarios, colonos y pequeños propietarios de cuatro ejidos, y un capitalista fuerte, Alberto Santos, entonces director de Gamesa, la gigante fábrica de galletas, en una "asociación en participación". Para que floreciera la asociación había que sembrar primero la confianza. Los ejidatarios querían "ver quién era el inversionista, qué clase de persona, y cuál era su propósito de asociación", relata Oscar Flores, delegado del ejido de Morones que se integró al proyecto Vaquerías. Lo que buscaba Santos era poner su capital en las tierras ejidales, para que todos juntos produjeran trigo. El tenía un mercado garantizado para el trigo: su galleta Gamesa que para 1989 estaba importando 300 mil toneladas de trigo al año. Santos contaba con un elemento vital para poner en práctica su idea: el apoyo de Carlos Salinas, quien recientemente había asumido el poder presidencial y que estuvo dispuesto a que se hiciera una inversión con ejidatarios.

Para hacer trabajar las tierras Santos propuso contribuir con una inversión de 8 millones de dólares para comprar maquinaria que incluyera 19 tractores, cinco trilladoras, implementos, 11 vagones de acarreo,

equipos rodantes de riego idóneos para las tierras desniveladas de Vaquerías, y equipo de secado, además de financiar el entierro de 138 kilómetros de tubería plástica para surtir agua al sistema de riego, construir 80 kilómetros de caminos revestidos, diez estaciones de bombeo, arreglar el canal principal, establecer 20 kilómetros de electrificación, bodegas y oficinas.

Convenció a la mayoría de los campesinos, y en mayo de 1990 se afiliaron 336 con Alberto Santos para formar la primera asociación en participación del país. "La razón de participar eran los beneficios, traer todo para producir, tierra, maquinaria moderna, riego acorde con la tierra", dice Oscar Flores.

En un contrato se definieron los recursos que cada parte ponía: los ejidatarios, colonos y pequeños propietarios pusieron el uso de sus 4 mil hectáreas de tierra y agua, su mano de obra y conocimientos; de su parte, los empresarios pusieron capital, maquinaria, equipo, organización y comercialización con el fin de incrementar la producción de las tierras. Fue vital el aporte del agua. "Buscamos que los proyectos sean redituables", dice Juan Pablo Alanís, coordinador de proyectos de Desarrollo Integral del Campo Mexicano, AC (Dicamex), la entidad promotora y asesora que se formó para atender a Vaquerías y promover asociaciones similares en otros ejidos. Los gobiernos federal y estatal pusieron un total de 6 millones de dólares para infraestructura y apoyos institucionales para el arranque del proyecto. En sólo dos meses y medio, se instaló toda la infraestructura y se pudo empezar a sembrar.

Para que todos entraran en igualdad de condiciones a la asociación, se hizo un arreglo previo con los campesinos. Se igualó la cantidad de tierra que aportaba cada individuo en diez hectáreas, que fueron valuadas en 8 millones de pesos por *paquete*. Se hicieron cuentas, pagándose una suma extra a los campesinos en condiciones de aportar tractores y maquinaria. El inversionista pagó la deuda del ejido de 3 mil millones de pesos y la deuda de cada ejidatario, y se fijó un valor equivalente en trigo, lo cual se paga en cada cosecha durante los 12 años que dura la asociación. Aparte de la deuda de antes, los ejidatarios deben a Santos 25 por ciento de cada cosecha para amortizar su inversión.

También el contrato estipula que los campesinos recibirán un pago (se llama compensación) por cada día de trabajo. En la actualidad se paga a un operador 4 mil 300 pesos por hectárea, al bombero 50 mil por turno de 24 horas, y 15 mil por ocho hectáreas de despaje. Para garantizar un ingreso a cada socio se contrató un seguro agrícola que paga 8 por ciento de la producción esperada, aún si falla la cosecha.

Desde del primer año Vaquerías ha tenido éxito en el plan productivo. Se han sacado ganancias en los dos primeros años por más de 6 mil millones de pesos, y hasta un nivel de 59 por ciento sobre ventas. La producción ha ido en aumento. Antes, en Vaquerías se sembraban 500 hectáreas de riego de gravedad, ahora se siembran hasta 3 mil 250 hectáreas con el sistema de riego más grande del país, y se ha diversificado la producción para sembrar soya y frijol también, dice Pablo Livas, director ejecutivo de Dicomex. En aras de estimular la *agro-business* en México Dicomex busca repetir el mismo esquema de asociación con ejidatarios, que "no haya relación patrón-jornalero, preferimos una asociación dividida mita-mitad", dice Livas. Lo que apoyaría Dicomex en las asociaciones y coinversiones que se están gestando en ocho estados es capital, tecnología, investigación, administración y comercialización garantizada, explica.

El proyecto ofrece trabajo a tiempo completo, el año entero, a 80 de los 336 socios. En épocas de deshierbe o cosechas, hay trabajo para entre 200 y 300 personas incluyendo mujeres y niños. Muchos de los ejidatarios siguen trabajando las áreas comunales, que suman 50 mil hectáreas con agostadero o criando chivos o ganadería. Otros buscan trabajos eventuales en Monterrey en obras en construcción u otras actividades. Para atender el problema de la generación de empleo, Dicomex planea crear programas alternativos empezando con un proyecto de criar chivos. Posteriormente se piensa fomentar un proyecto hortícola para cultivar brócoli, repollo y chiles y hacer piscicultura en los canales, explica Alanís.

La filosofía del proyecto está clara: "Esto es una empresa. Nosotros sembramos y cosechamos cada seis meses", dice Mario García, el encargado de la promoción agrícola y la organización por parte de Dicomex. El tema del negocio ocasionó fuertes debates. Cuando vino la hora del reparto de utilidades hubo descontento. "Muchas personas vieron que de esos 6 mil 500 millones de utilidades él (Santos) se quedó con 3 mil millones y es una sola persona", relata Oscar Flores. Cuando la cosecha resultó dañada por la granizada, a cada ejidatario le correspondieron 2 millones 500 mil pesos de utilidades. Entonces, los ejidatarios-socios cuestionaron los costos de producción y de la asistencia técnica. Demandaron tener mayor control sobre el plan de producción, que es donde se deciden los costos que, obviamente, son lo que se resta de las utilidades.

Se llegó a un acuerdo. Santos delegó su voto -que equivale a la mitad de los votos- a los ejidatarios para que decidieran el plan de producción con base en su evaluación del ciclo agrícola pasado y un estudio de las recomendaciones del fideicomiso de investigación agrícola de Vaquerías. Se está gestando un nuevo esquema de pago de la asistencia técnica de los ingenieros de Dicomex para rebajar los costos de un 8 por ciento de las utilidades a un 5 por ciento. "Ellos tienen mucho interés en estar dirigiendo la producción, y es bueno porque participan y dependen menos de nosotros", explica Juan Fernández, supervisor de riego de Dicomex.

En Vaquerías se han resuelto dos problemas persistentes de los ejidos: el crédito y la comercialización. Se creó un fondo de crédito para comprar refacciones y pagar cualquier costo imprevisto en la producción, y cuando se levanta la cosecha se deducen los gastos y se paga mitad y mitad entre Santos y los ejidatarios. Eso permite que la producción no se interrumpa por falta de crédito, dice Flores. Dicomex ha encontrado compradores garantizados de la producción de Vaquerías: el trigo se vende a Agroinsa o Gamesa, la soya

va a Ayamsa de Monterrey, una productora de oleaginosas, y el frijol se empaqueta en una procesadora propiedad de Alberto Santos y se comercializa a Aurrerá.

A pesar de los resultados obtenidos hasta la fecha, no ha sido posible convencer a todos los ejidatarios del proyecto. Quedaron fuera unos 40 ejidatarios con 400 hectáreas. Revertir el escepticismo y la desconfianza sembrada durante décadas no es fácil. Lencho Guajardo, de 39 años, viven en el poblado de Vaquerías pero aún no participa. Sencillo, expresa sus dudas: "Si hay alguna sociedad es justo que los socios sepan en qué se van a gastar los costos de producción".

Los que participan en el proyecto de Vaquerías han peleado por el tema de los costos, y ven ventajas en el proyecto que quizás tarde o temprano puedan convencer a Guajardo. "Desde el punto de vista de que existe un empleo, estamos mejorados. No tenemos que tramitar créditos y arriesgar una tierra, y me pagan", dice el delegado Flores. Un socio que cuida una estación de bombeo ve otras ventajas: "Cuando yo entré al programa tenía sólo siete hectáreas desmontadas", dice Joaquín Guajardo Castillo, del ejido Barretas. El proyecto le facilitó un préstamo para hacer el desmonte de siete hectáreas más.

Para los ingenieros de Dicomex, Vaquerías resultó una prueba noble del esquema de asociación en participación, porque se consiguieron utilidades en tierras no demasiado buenas y con cultivo de granos básicos. Los ingenieros de Dicomex piensan que los otros proyectos podrían salir más fáciles. "Si podemos comprobar (la factibilidad) del proyecto con granos básicos, no hay problema de desarrollarlo con hortalizas y frutales", explica Pablo Livas.

Vaquerías está respondiendo a muchas necesidades del campo y del campesino. Sin embargo, falta un largo tramo hasta que los campesinos salgan de su condición de endeudamiento. "La gente sigue *endrogada*. No hay salvación. Si te vas donde puedas ganar, para el otro lado, te cachan", dice el bombero Joaquín Guajardo Castillo con una risa.

Plan Chontalpa, Tabasco

En la carretera, desde Villahermosa y pasando Cárdenas, el paisaje es una vegetación exuberante e interminable. Ese verde que lo envuelve todo es la esperanza, el desafío y la decepción de los ejidatarios que fueron dotados de algunas de las mejores tierras del país, donde abunda el agua. En medio del verdor purificador y el cielo vasto y resplandeciente, el Ingenio Benito Juárez eructa, lanzando una neblina densa que crece y mancha la naturaleza que permitía la ilusión de una rara pureza.

Un camino amplio y recto pasa entre arrozales que son parte de las 52 mil hectáreas del Plan Chontalpa, el gran proyecto que auspició el gobierno en los años sesenta para desarrollar esta región promoviendo con infraestructura y créditos la producción de arroz, caña y carne de res.

Paralelo al camino está uno de los drenes más anchos que nutren las tierras ricas. Aquí, en la tierra del agua del poeta Pellicer -y de los drenes de la SARH- todo el año es temporal.

Cuatro campesinos descansan en un puente sobre un canal atorado de tule, y comentan su problemática: "El crédito no nos ha salido. Ya sembramos diez hectáreas (de las 15 que tiene cada uno), se está haciendo a puro valor mexicano", dice Leonardo Bautista. El crédito se requiere para conseguir urea, mano de obra, fertilizante y plaguicida contra la plaga del gusano, pero Bautista tiene su crédito vencido con Banrural.

Hace seis meses apenas que el Congreso aprobó la reforma al artículo 27 constitucional y ya son varios los ejidatarios que han vendido parte de esas tierras. Recientemente, Nicolás Cruz Quiroga cuenta que vendió dos hectáreas, quedándose con diez que le corresponden de tierras colectivas y con tres de las cinco que tuvo de parcela. Se las vendió a un ingeniero que comercia con insumos agroquímicos en Cárdenas -la segunda ciudad de Tabasco, que queda cerca- quien ya ha comprado más de 40 hectáreas en este ejido. Cruz Quiroga recibió 4 millones 800 mil pesos por sus dos hectáreas. "Se hace por necesidad. El dinero me duró 15 días porque debía en la tienda, debía la luz, debía la predial", enumera. A pesar de la riqueza de estos terrenos, los campesinos reciben un precio bajo por sus parcelas porque en el enorme Plan Chontalpa hay gran oferta de tierras.

Más adentro está el Ejido C-21. La aldea de casas modestas y calles lodosas por la lluvia, rodea a un parque donde se asienta una estructura de acero oxidado. Son las ruinas del vivero de jitomate, papaya y repollo, un esqueleto que sirve de monumento magro del proyecto colectivo de ejido que se desmembró y desmanteló hace siete años. A un lado está una sencilla clínica del IMSS y una tienda Conasupo-Solidaridad.

Debajo de la ramada se reúnen siete ejidatarios. Platica con ellos Andrés Manuel López Obrador, ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado y un político que tanto en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como en el PRD ha trabajado con los campesinos e indígenas de Tabasco. Los señores explican que el proyecto del ejido colectivizado fracasó porque la unión de ejidos se manejó de manera cupular, diseñó programas colectivos sin ofrecer incentivos a los agricultores e implantó una "corrupción institucional". El Ejido C-21 compró tractores, vacas Holstein, instaló granjas de puercos y viveros. El esfuerzo fracasó y los ejidatarios decidieron dividir todo, lo cual se hizo de tal manera que hasta se arrancaron las láminas del techo de la granja porcina. Quedaron lecciones: "Un colectivo bien administrado sí funciona. La nueva forma de trabajar es buena (porque) ya no le pueden robar", dice Miguel Jiménez González, quien se autoidentifica como "tesorero del ejido sin dinero".

También en el C-21 varios ejidatarios están vendiendo ya parte de sus propiedades. A partir de diciembre

se han vendido aproximadamente 80 hectáreas de las 2 mil 400 del C-21. En otros ejidos vecinos, el C-10 y el C-16 se ha vendido hasta más, pero los campesinos del C-21 son trabajadores así que se vende menos. Con la reforma al 27, el ritmo de ventas se ha acelerado. "Ahora hay más libertad" para vender, y la "garantía" de que uno consiga el título, dice Isabel Torres Osorio, un hombre canoso que lleva playera rosada con un dibujo de surfer.

"Nosotros no estamos aún plenamente conformes con lo que está pasando", afirma Miguel Jiménez. "Por cartera vencida van a vender el ejido para pagar el banco". Muchos de los ejidatarios cayeron en cartera vencida durante la crisis cuando subieron las tasas de intereses desorbitadamente, y desplomaron los precios de los productos. Hoy, menos de la mitad de los 160 trabajadores del C-21 son sujetos de crédito de Banrural. "¿A dónde nos vamos a ir si no hay crédito?", pregunta con enojo Pánfilo Blanco.

Después de escuchar, López Obrador, conocido por todos aquí, comenta: "Para el campesino, la salida que yo vislumbro es la diversidad, no meter todo a un cultivo y buscar la subsistencia. Lo más importante es tener la alimentación".

López Obrador trae una propuesta para el campo que, según el líder y ex director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, reactivaría la economía rural. "El eje del programa sería estimular la producción y el empleo" dirigiendo apoyos del gobierno tanto a la iniciativa privada como al sector social, o sea a los ejidos, y coinversiones entre todos los sectores, explica mientras atraviesa los arrozales en su Volkswagen.

El programa agrícola que contempla López Obrador tiene tres dimensiones para tres tipos distintos de producción agrícola. "En primer lugar está la producción agropecuaria de autoconsumo con un enfoque nutricional", dice el ex candidato perredista a la gubernatura de Tabasco. A nivel de los pueblos se promovería la producción casera de alimentos con mayores valores nutritivos incluyendo aceite, huevo, pollo. En un segundo nivel el gobierno aplicaría medidas políticas para favorecer una producción excedente de los comestibles de la canasta básica para que hubiera autosuficiencia de productos básicos en el estado. Finalmente, en un tercer nivel, el gobierno actuaría para promover la agricultura comercial con el propósito de generar empleos.

El perredista insiste en promover la producción de granos básicos y alimentos en general porque no comparte el criterio de aceptar los precios internacionales como base para definir políticas agrícolas nacionales. "No estoy de acuerdo con la ventaja comparativa porque no hay ventajas", dice. El maíz puede salir más barato comprándolo en el extranjero, pero al agregar los gastos de distribución y tomar en cuenta la calidad, la derrama en la región con el empleo y la cultura del maíz, no queda clara la ventaja de importarlo, argumenta.

"Con las llamadas ventajas comparativas estamos generando miseria con todo lo que trae consigo: hambre, desnutrición, etc.", sostiene.

Nueva Italia, Michoacán

Después de pasar una sinuosa y precipitada bajada del valle templado de Uruapan, la carretera se endereza poco antes de llegar a Nueva Italia, tierra caliente e idónea para los cítricos y el mango. Al entrar a este poblado poco atractivo pero de apariencia próspera se encuentra, a un lado de la carretera, el viejo cascarón de la hacienda de la familia Cusi, los italianos que se asentaron aquí, cultivaron el arroz, e inspiraron el nombre de este lugar.

En la ex hacienda están las oficinas del comisariado ejidal que llevan cuatro meses de estar tomadas por un grupo de ejidatarios que busca quitar al comisariado por no haber convocado ni a una asamblea en dos años, y por obstaculizar el acceso a créditos, explican los campesinos. Se dice que el pleito es entre priístas y perredistas, pero los de la toma insisten que son un grupo plural, lo cual coincide con las versiones de distintos ejidatarios que no están en la toma.

El ejido Nueva Italia fue y es privilegiado. Es el segundo más grande del país, tiene 10 mil 500 hectáreas con riego y 20 mil hectáreas de temporal repartidas entre mil 38 ejidatarios, y cuenta con resolución presidencial desde 1938. Está bien comunicado para sacar la producción, ya que a una hora de viaje se encuentra Uruapan y a media hora el valle de Apatzingán.

A pesar de su patrimonio extenso y su rico potencial, Nueva Italia está estancada en dos problemas fundamentales que afligen a muchos ejidos: el crédito y la comercialización.

El problema del crédito tiene muchas facetas que abarcan desde los costos de hacer producir la tierra hasta el precio del producto en el mercado. Se requiere crédito porque los campesinos están más apretados que nunca. "Subió la gasolina, el fertilizante subió, pero el grano básico no", dice Carlos Zirate Al varez, un hombre de ojos verdes y cejas pobladas. Serio, preocupado, Zirate tiene su explicación de porqué no ha subido el precio del grano básico: "Ninguna empresa extranjera lo produce".

Para pelear los escasos créditos se requiere la firma de una mesa integrada por el comisariado ejidal, pero como en la mesa faltan dos personas no se puede solicitar crédito. Mientras continúa el pleito, la producción se estanca y los problemas de los ejidatarios crecen.

Paralelamente, el ejido está negociando la cartera vencida con Banrural, pero es difícil llegar a la solución definitiva mientras hay divisiones internas, y se complican las cosas porque hace dos años se cerró la oficina de Banrural. El tema del crédito tiene preocupados y frustrados a todos. Para llenar el

requisito de Banrural de ofrecer una garantía para su préstamo los ejidatarios no tienen más que su tierra; las casas del pueblo no están escrituradas aunque tienen años de solicitar a las autoridades que regularicen Nueva Italia. Los ejidatarios se sienten amarrados. Benjamín Serrato, ex comisariado ejidal, está sembrando toronja, y necesita un crédito refaccionario (a largo plazo) mientras maduren los frutales. Serrato pide mayor flexibilidad a Banrural: "Que no fuese tan cerrado el requisito de la garantía de que se pueden enajenar una parcela. La ley nos lleva a que no haya más alternativa que privatizar", lamenta.

Una opción que ofrece el gobierno, el programa de crédito a la palabra, no responde a las necesidades. Ese programa otorga un crédito sin garantía de 300 mil pesos por hectárea para la siembra de granos básicos. Incluso si fueran a sembrar granos básicos, los 300 mil pesos cubren apenas el barbecho y rastro, pero no deja ni para una sola abonada de una hectárea de milpa. Pero tampoco sueñan los ejidatarios con sembrar granos básicos. Como dice el comisariado ejidal, Abel Palominos Casillas, quien despacha en las oficinas del PRI, la producción de frutales "es el presente y el futuro, porque se exporta a Estados Unidos, Japón y Canadá, y los productos de exportación son más redituables porque captan dólares".

Nueva Italia tiene una larga historia ligada a la agricultura de exportación. En los años cincuenta y sesenta, el ejido exportó melones y pepinos a Estados Unidos, y desde los ochenta está exportando mango. Hubo experiencias amargas y aprendizajes.

Este año, cuentan en la ex hacienda, un cacique de Nueva Italia afilió al ejido a una unión de mangueros que hizo un trato de surtir exclusivamente a una empacadora. Con este trato, los productores de mango se vieron obligados a vender su producto a la empacadora aunque hubieran podido conseguir mejores precios con otros comercializadores. "Nosotros no estamos libres de fijar el precio. Son los acaparadores quienes fijan el precio", dijo Carlos Zirate Alvarez.

Algo similar pasó en 1981 o 1982, recuerda Alfonso Villegas Prado, contrincante para comisariado ejidal. Hace diez años, muchos ejidatarios sembraron parte de sus parcelas con sorgo. El gobierno importó sorgo de Argentina y se desplomó el precio de ese grano en México.

Sin embargo, la *agro-business* internacional ha dejado ideas que algunos proponen rescatar para enfrentarse con la situación actual. José García García vivió toda la historia de Nueva Italia. Recargando sus 75 años en su bastón, el viejo recuerda cómo se trabajaba con la empresa norteamericana Esteban Hermanos, en la época del algodón. La empresa contrató la cosecha, fijó el precio de garantía y otorgó créditos para la producción. Durante 14 años se producía sin seguro y los campesinos sacaron ganancias. Vino una plaga y se fue la empresa, pero la experiencia de cultivar, vender y sacar ganancias quedó fresca en la memoria de García García.

Existe en Nueva Italia un esfuerzo de promoción de la producción de frutales. El comisariado, Palominos Casillas, con su Comité Pro-plantación de frutales ha conseguido una donación de 20 mil 800 mangos, toronjas y naranjos del Programa Nacional de Solidaridad y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado. Los árboles se han repartido entre 86 personas "de acuerdo con la necesidad", dice José Luis Torres, secretario del Comité.

Pero el mismo programa de promoción causa conflictos. Los programas de Solidaridad "caen entre los caciques no-más", comenta Samuel Hernández, un hombre de clásicas patillas y bigotes mexicanos, quien acusa que el comisariado repartió las plantas a su criterio. Benjamín Serrato comenta que no se convocó a una asamblea para informar del apoyo de frutales: "Debe decidir todo el ejido en asamblea sobre algunos bienes del ejido", explica.

Mientras no resuelven las divisiones internas ni el problema con Banrural, los campesinos de Nueva Italia son víctimas de los mismos rumores que están sembrando la suspicacia, la preocupación y la incertidumbre en los ejidos en todo el país. Hasta la fecha, no ha llegado ningún funcionario ni de la SARH ni de Reforma Agraria que les explique cómo va a funcionar la nueva ley. "Yo pediría que al privatizar nuestra fruta tenga un buen precio porque siempre quedamos debiendo, y es nuestro miedo que tomen nuestras tierras", dice Beatriz Navarro, una ejidataria viuda que trata de sacar adelante a sus hijos trabajando su parcela.